

remítanse los autos originales á la Corte Suprema de Justicia para su revision.

El Juez de Distrito de Sonora así lo decretó definitivamente, firmándolo con los testigos de su asistencia ordinaria.—*D. Elias G.—A.—P. del Rincon.—A.—Manuel Sanchez.*

Es copia de su original que certifico. Guaymas de Zaragoza, Marzo 5 de 1873.—*Elias G.—A.—P. del Rincon.—A.—José Lopez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México. Mayo 21 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por los Sres. Sandoval y Bülle ante el Juzgado de Distrito de Sonora, contra el cobro que del derecho del 5 p \S . de exportacion les ha hecho el administrador de la Aduana marítima de Guaymas, sobre la cantidad de 500 pesos fuertes que remitidos de Hermosillo á la consignacion de aquellos, se introdujeron á Guaymas en 30 de Enero último, amparados con la guía núm. 23 expedida por el Administrador General de Papel Sellado, por considerar los quejosos violada con tal procedimiento, la garantía individual que les asegura el art. 4º de la Constitucion general de la República, y considerando: que segun aparece en el expediente, el Administrador de la Aduana marítima de Guaymas se funda para cobrar el 5 p \S . indicado, en las leyes de 31 de Mayo de 1872 y 9 de Diciembre de 1871; y que con arreglo á la primera de esas leyes, el 5 p \S . de exportacion debe cobrarse cuando la exportacion se verifique, y no cuando la plata acuñada circule nada mas, lo cual sucede en el presente caso.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo que previene el art. 101 de la Constitucion federal, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este jui-

cio el 4 de Marzo último, por el Juez de Distrito de Sonora, que declara: que la justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Sandoval y Bülle, contra el cobro que del derecho del 5 p \S . de exportacion les ha hecho el Administrador de la Aduana marítima, sobre 500 pesos á la introduccion de dicha cantidad al puerto de Guaymas.

Devuélvase los autos al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José M. Lozano.—José M. Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—José M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman. L. Velasquez.—M. Zavala.—Ignacio. M Altamirano.—Juan A. Mateos, secretario.*

Es copia que certifico. México, Junio 17 de 1873.—*Lic. Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes por la testamentaria de D. Atanasio Rodriguez, contra el Juez 1º de letras de esa Capital, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 3º suplente de Distrito.

En otros juicios como el presente, se ha intentado ya hacer valer la supuesta *ilegalidad* de las autoridades del Estado, para por ese medio estorbar los procedimientos judiciales ó administrativos de aquellas.

Sorprende verdaderamente que en nego-

cios en que no pueden ni deben poner mano los jueces federales, por impedirlo la misma Constitucion que se invoca, haya ciudadanos que intenten contravenir á las estipulaciones de esa, desentendiéndose de todo respeto á autoridades que deben su subsistencia á las leyes que emanan de la propia Constitucion, y cuya subsistencia la han reconocido muy legítima los Supremos Poderes de la Union.

Hasta ridículo sería que un juez federal pudiera ejercer legalmente jurisdiccion en un Estado, caso de que las autoridades en él establecidas no tuviesen procedencia legítima. De establecerse tan absurdo principio, resultaría desde luego, que los actos de aquel Juez serían menospreciados por las autoridades de su Estado, y que estas, por razon de su origen, le denegasen caracter alguno oficial.

No me detendré á entrar en otras consideraciones con que habría de demostrar hasta la evidencia, que no es susceptible alegar en recursos de amparo la incompetencia de todas y cada una de las autoridades de un Estado.

La ley que determina esos recursos, no ha sido dictada para defender cuestiones políticas, ni para contrarestar los fallos de la justicia.

Fíjese un poco la atencion en lo que previene el artículo 8º de la ley referida, y se verá entonces si es indiferente promover juicio de amparo en cada negocio que se gire por los funcionarios del Estado.

A la especie de los asuntos judiciales, y no á otra, se sabe corresponde el que aquí se trae, de cuyo aserto es la mejor prueba la de que los reclamantes han seguido judicialmente los trámites de este asunto, á cuya circunstancia se agrega la confesion, de que la testamentaria del Sr. Rodriguez reporta la deuda que es materia de la sentencia por el Juez de 1ª instancia, en pos de los derechos bien claros que asisten á la Sra. ex-religiosa María Josefa López. Yo me

atrevo á calificarlo así, porque á todos debe ser notoria la justicia, cuando la hay, y al ejecutarla ese C. Juez, además de que ha obrado en la esfera de sus legales facultades; su sentencia ha sido sancionada por su superior.

¿Qué recurso puede interponerse por actos de una autoridad tan competente como lo es la que ha dispuesto que se restituya su dote á la Sra. López?

Supongo que el C. defensor de la testamentaria expresada, se hallaba animado de su mayor respeto á la ley, y que por lo mismo, no tendrá inconveniente en que se cumpla lo que proviene la de 13 de Julio de 1859, ley nacional, en sus artículos 15, 16 y 17.—¿No le parecería una lamentable falta, que por salvar los intereses que hoy poseen sus defensos, dejasen las autoridades del Estado de impartir á la Sra. López la proteccion que esa ley le confiere?

Consta en el escrito del C. defensor, que desde el año de 1840 estaban reconociéndose á la Sra. López, los capitales que á la testamentaria reclama, y consta tambien de los datos que sirvieron al C. Pedro E. López para distribuir otros capitales de religiosas exclaustradas, que á dicha Señora correspondia en calidad de dote los de aquel reconocimiento. ¿Se le han entregado hasta ahora uno solo de ellos? ¿Se tiraron las escrituras que le correspondian, lo mismo que se hizo con las demas señoras religiosas á quienes tocó mejor suerte que á la Sra. López?

Quizá sea una casual desgracia la que influye en este negocio, por la que no está aun en posesion de su dote la Sra. López; pero en mi humilde concepto, es un hecho, al que se pueden aducir suficientes pruebas, que el origen de que esa Señora se vea en los brazos de la miseria, no reconoce otra causa que la de no habérsele restituido, como debiera, lo que adquirió con pleno derecho. ¿Con cuál, pues, se pretende ahora, por medio de un juicio de amparo, que la

fortuna de que ha disfrutado por muy considerable tiempo la testamentaria, se considere libre de las obligaciones á que la sujetara el testador?

¿En qué ley se apoyan los procedimientos, para oponer excepciones de prescripción, de acción, nulidad, etc., etc., cuando el capital que constituye la dote de la Sra. López tiene por todo carácter el de aquellas imprescriptibles imposiciones que entraron al dominio de la Nación?

Si semejantes excusas pudieron servir como buenas á un juicio ordinario, no por esto la sentencia que á él recayera sería motivo ni materia de un juicio de amparo, porque la ley de 20 de Enero de 1869, artículo 8º, ha excluido de ese recurso á los negocios judiciales; y el que nos ocupa, que ha seguido el paso lento de la vía judicial ordinaria, no puede extimarse en lo absoluto como negocio en que tenga que hacer la ingerencia de los tribunales federales, á quienes, por otra parte, no corresponde tampoco hacer declaraciones generales, por prohibirlo así el artículo 2º de la mencionada ley.

Por lo expuesto, pues, se observará que no estando justificados los derechos que tenga la testamentaria, para eximirse de resarcir á la Sra. López lo que demanda, menos puede estar en la conciencia de dichos tribunales, asumir la responsabilidad de suspender estos que se califican de injustos, tan solo porque se les exige la forma legal de que están revestidos.

En consecuencia, cree el que suscribe, que la autoridad ejecutora del acto que se reclama, tiene su acción expedita para llevar á término este asunto, en el que se halla interesado el fisco de la federación, cuyo buen nombre exige en este lugar el cumplimiento de la ley relativa de 13 de Julio de 1859.

Pido, por lo tanto, respetuosamente al C. Juez, que con apoyo de lo prescrito en el artículo 16º de la ley de 20 de Enero citada,

se sirva denegar el recurso que se intenta, y que por la falta de motivo que lo justifique, se imponga al responsable la pena que designe ese artículo.

Protesto etc.—Aguascalientes, Abril 16 de 1873.—*I. Ocadiz.*

Otrosí digo.—Que por haberse acumulado varios traslados sobre esta clase de juicios en la Promotoría que desempeño, y por diversos negocios de responsabilidad en mi encargo de jefe de hacienda, no fué posible evacuar dichos traslados en el término por el que se me corrieron.—Fecha ut supra.—*Ocadiz.*

Es copia que certifico.—Aguascalientes, Abril 16 de 1873.—*Diego Ortigosa.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Aguascalientes, 6 de Mayo de 1873.—Visto el presente recurso de amparo promovido por D. Juan G. Alcazar en representación de los albaceas del finado D. Atanasio Rodriguez, todos de esta vecindad, contra el C. Juez 1º de 1ª instancia de esta capital, de quien se queja, exponiendo: que con los trámites de un juicio seguido contra la testamentaria, violó la garantía otorgada á la propiedad. Visto el informe del C. Juez 1º de 1ª instancia; los pedimentos fiscales; la citación para sentencia y el anterior dictamen del Sr. Asesor nombrado, Lic. D. Joaquín del Peral, que á la letra dice: «Sr. Juez de Distrito Suplente. D. Juan G. Alcazar, con poder de los Sres. Albaceas del finado D. Atanasio Rodriguez, se presentó á ese Juzgado, interponiendo un recurso de amparo contra el Juez 1º de 1ª instancia de esta capital, que con los trámites de un juicio civil, seguido contra la testamentaria, violó las garantías que nuestra Constitución de la República otorga á la propiedad. Apoya su recurso, en los hechos siguientes: Primero; el Supremo Tribunal de Justicia, revocó un auto del Juez de 1ª instancia en el juicio á que

se refiere. Segundo; el Juez de 1ª instancia trata de normar los procedimientos de un juicio, á la ley vigente que rige en el Estado. Tercero; esa ley perjudica los intereses de la testamentaria. Las autoridades del Estado son inconstitucionales. Sin necesidad de conocimientos profesionales en la ciencia del derecho, se apercibo desde luego, que el Sr. Alcazar ha cometido un vicio lógico (petición de principio) cuyas consecuencias necesarias son siempre el error del juicio: supone como cierto, que el poder judicial del Estado es inconstitucional. Como axioma, que las leyes de procedimientos en lo contencioso judicial, que perjudican los intereses del litigante, no deben emplearse en los trámites del juicio. Como verdad resuelta; que el auto del Superior que revocó el del Juez inferior, es nulo; y por último, da por supuesto, que el auto del Supremo Tribunal, los procedimientos que el Juez de 1ª instancia trata de emplear, y el objeto del juicio que sirve de fundamento á su queja, no es un negocio judicial. La ley orgánica para los juicios de amparo, previene terminantemente: (art. 4º de la ley de 20 de Enero de 1869) que "El individuo que solicite amparo, presentará al Juez un ocurso, en el que exprese cual de las tres fracciones del art. 1º sirve de fundamento á su queja;" si el primero, explicará por menor el hecho que la motiva, y designará la garantía individual que considera violada. La misma ley previene [art. 8º] "que el recurso de amparo no es admisible en negocios judiciales." ¿Cuál es el hecho que el Sr. Alcazar alega en apoyo de su queja? Un fallo del Supremo Tribunal de Justicia que el Juez de 1ª instancia trata de obedecer. ¿Cuál es la garantía que considera violada? El perjuicio demostrado materialmente que resultará á los valores de los bienes de la testamentaria, si en la ejecución de la sentencia del Superior, se emplean los trámites que formula la ley. ¿Es ó no judicial el negocio material de este recurso de am-

paro? Para resolver negativamente esta cuestión, sería necesario invertir de una manera absurda el sentido de las palabras de nuestro idioma; no es un problema, y basta el sentido común para juzgarlo. No es admisible (dice la ley,) el recurso de amparo en los negocios judiciales. ¿El sentido jurídico de este adjetivo "admisible" se refiere á negar el amparo después de sustanciado el juicio, ó á desechar de plano el recurso, dejando á la parte que lo entabla su derecho á salvo por la calificación que el Juez haga de su calidad? La Suprema Corte de Justicia al revisar el presente, y teniendo en su alta consideración los muchos que se instruyen de igual naturaleza con grave perjuicio de la pronta administración de justicia, con mengua del decoro debido á las autoridades constituidas, y sobre todo que se escojitan como medio de instrumento para desahogar resentimientos de pasiones, que no se contienen al influjo de ningún motivo tutelar, creo se dignará resolver sobre la inteligencia jurídica de aquella palabra empleada por el legislador.

En consideración á lo expuesto, y de conformidad con el tan cumplido pedimento del Sr. fiscal, soy de opinión, que V. juzgando definitivamente, falle con las siguientes proposiciones:—1ª: La Justicia de la Unión desecha el recurso de amparo intentado por D. Juan G. Alcazar, á nombre de los Sres. albaceas de la testamentaria del Sr. D. Atanasio Rodríguez. En consecuencia, no lo ampara ni lo protege en el presente juicio.—2ª: De conformidad con el artículo 10 capítulo 5º del arancel vigente y sus relativos del capítulo 2º, se condena á la parte del Sr. Alcazar á pagar las costas y honorarios del Asesor.—3ª: La misma parte del Sr. Alcazar, repondrá el papel de que se ha hecho uso, no siendo el sellado correspondiente, con el debido.—4ª: No se impone á la misma parte del Sr. Alcazar, la multa que designa la ley, por ser esa facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia.—5ª: Publíquese esta sentencia en el periód-

co oficial del Estado, con insercion del dictámen que precede.—6º: Notifíquese al Sr. Promotor fiscal y al Sr. Alcazar, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Aguascalientes, Mayo 2 de 1873.—*Lic. Joaquin del Peral.*

De conformidad con dicho dictámen y con apoyo de las razones en que se funda el Juez que suscribe, falla de la manera siguiente:—1º: Que la Justicia de la Union desecha el ocurso de amparo intentado por D. Juan G. Alcazar, á nombre de los Sres albaceas de la testamentaria del Sr. D. Atanasio Rodriguez. En consecuencia, no lo ampara ni lo protege en el presente juicio.—2º: De conformidad con el artículo 10 capítulo 5º del arancel vigente y sus relativos del capítulo 2º, se condena á la parte del Sr. Alcazar á pagar las costas y honorarios del Asesor.—3º: La misma parte del Sr. Alcazar, repondrá el papel de que se ha hecho uso, por no haber ministrado del sello tercero que corresponde.—4º: No se impone á la misma parte del Sr. Alcazar la multa que designa la ley, por ser esa facultad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.—5º: Publíquese esta sentencia en el periódico oficial del Estado, con insercion del dictámen en que se apoya.—6º: Notifíquese al Sr. Promotor fiscal y al Sr. Alcazar, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El Sr. D. Antonio Morfin, tercer Juez suplente de Distrito, así lo decretó y firmó. Doy fé.—*Antonio Morfin.*—*Silverio Arteaga.*

Es copia que certifico. Aguascalientes, 12 de Mayo de 1873.—*Silverio Arteaga.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia

México, Mayo 26 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado

de Distrito de Aguascalientes por D. Juan G. Alcazar, representante de la testamentaria de D. Atanasio Rodriguez, contra el Juez 1º de 1ª instancia que trata de ejecutar una sentencia, y con cuya ejecucion cree el quejoso que se viola la garantía á que se refiere el artículo 16 de la Constitucion federal. Vista la sentencia pronunciada en este juicio por el Juez de Distrito, en la que entre otras cosas, además de negarse el amparo, se condena á la parte de Alcazar á pagar las costas y honorarios del Asesor segun á la consulta de esto; y considerando: que el Juez 1º de 1ª instancia procede dentro de la órbita de sus facultades sin vulnerar ninguna garantía personal; y que Alcazar no ha procedido con algun fundamento digno de atencion solicitando este amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitucion federal y en el 16 de la de 20 de Enero de 1869, se decreta: que se reforma la sentencia pronunciada respecto de este juicio, el seis del actual por el Juez de Distrito de Aguascalientes, y se declara:

Primero; que la justicia de la Union no ampara ni protege á D. Juan G. Alcazar, contra el acto que reclama.—Segundo: se revoca dicha sentencia en la parte que condena á la de Alcazar al pago de las costas y honorarios del Asesor.—Tercero: que se condena á Alcazar al pago de una multa de \$ 100.—Cuarto: lo acordado respecto del Asesor.—Quinto: Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese a su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos respecto de los puntos primero, segundo, cuarto y quinto y por mayoría respecto del tercero, los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*J. M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro*

Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Castañeda y Nájera.—M. Auza.—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—Luis Maria Aguilar, secretario.

Es copia. México, 10 de Junio de 1873.
—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por Miguel Telles, por haber sido desterrado de su domicilio.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En los presentes autos está probado el hecho de que se queja el C. Miguel Telles, aun por confesion expresa de la autoridad inmediatamente responsable; en ellos mismos se ha demostrado con toda evidencia, que tal hecho de cualquiera manera que se considere, importa la violacion flagrante del artículo 16 de la Constitucion federal.

En esa virtud, el Promotor no pulsa inconveniente en suscribir el alegato que antecede, haciéndolo suyo, para pedir á V. en cumplimiento de su ministerio, que se sirva otorgar el amparo que se solicita, conforme á la ley de 20 de Enero de 1869.

Zaragoza, Abril 4 de 1873.—*E. Sanchez.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Puebla, Abril 15 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Miguel Telles, contra el C. Gefe político del Distrito de Tepeji por haberlo desterrado del lugar de su domicilio, con cuyo hecho haya violado las garantías que otorga el artículo 16 de Constitucion en su perjuicio; el escrito de queja; el informe de la autoridad responsable; la orden librada de apre-

hension; el parecer fiscal; lo alegado y cuanto ha sido de verse. Considerando: que resulta justificado el acto que motiva la queja; que al no estar en las facultades de la autoridad política el desterrar, pues aun cuando efectivamente sea nocivo en el pueblo el quejoso, esto solo podrá dar mérito para ponerlo á disposicion del Tribunal competente para que lo juzgara y sentenciara, han violádose las garantías que concede el artículo de la Constitucion que ha servido de fundamento al interponerse el recurso, en perjuicio del promovente; y que por lo mismo, el caso se haya comprendido en lo dispuesto por el artículo 19 de la ley de 20 de Enero de 1869. Por estas consideraciones, y de conformidad al parecer fiscal, se declarar que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Miguel Telles, por haber sido desterrado del lugar de su domicilio por el C. Gefe político del Distrito de Tepeji.

Hágase saber, sáquense copias de esto fallo para su publicacion en el Diario Oficial del Estado y Semanario Judicial de la Federacion, y elévense las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para la revision de los procedimientos.

El C. Juez de Distrito del Estado definitivamente juzgando, lo proveyó, mandó y firmó.—*Antonio Rivero. Ante mí.—Antonio Garcia Mosqueira.*

Es copia que certifico, la cual se saca para su insercion en el Semanario Judicial de la Federacion. Puebla, Abril 16 de 1873.
—*Antonio Garcia Mosqueira.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 21 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el C. Juez de Distrito de Puebla por el C. Miguel Telles contra el Gefe político del Distrito de Tepeji por haber dictado contra el promovente una orden de destierro, considerando: que la providencia que ha motivado el pre-